

Talca, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.-

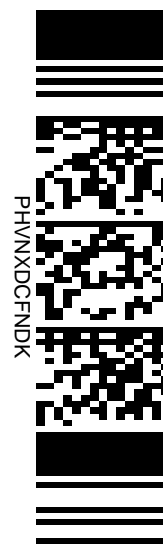
VISTO:

1.-º) El abogado don Eduardo Cornejo González, en representación de Benjamín Venegas Rodríguez, interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de fecha 21 de noviembre del año 2022 dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó, que condenó a Benjamín Venegas Rodríguez, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y que no se le condena al pago de las costas de la causa, por haber colaborado en ella; como AUTOR del delito de Robo con Violencia e Intimidación en grado de Consumado, ocurrido el día 11 de mayo de 2 19, alrededor de las 22: horas en la empresa Coca Cola, ubicada en Longitudinal Sur KM 186, de Curicó.

Invoca como causal de nulidad, aquella contemplada en el artículo 373 letra b) en relación con el artículo 385 inciso 1º del Código Procesal Penal, planteando que se ha impuesto una pena superior a la que legalmente corresponde, por lo que solicita la nulidad del fallo y que se dicte **sentencia de reemplazo**, basado en la circunstancia que la sentencia en su **Considerandos Decimoquinto y Decimosexto** ha hecho una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, puesto que no se entiende como determina una pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, tratándose de delitos cuya extensión del mal causado no aparece claramente fundamentada, como debe serlo, conforme al art. 69 del Código Penal y artículo 36 del Código Procesal Penal, estimando que resulta contrario a la lógica sostener que no concurre ninguna agravante y al mismo tiempo se reconozca la cooperación sustancial y el Tribunal termine reduciendo la pena en solo tres años, aplicando 7 años, sosteniendo que el artículo 351 del Código Procesal Penal es más favorable.

Agrega que, en su concepto, tal determinación de pena que baja de 10 años a 7 años, no es una aplicación prudente y racional de la norma, lo que vulnera el principio penal de absorción o consunción, sin que se observe en el fallo una fundamentación en relación al art. 69 del Código Penal, teniendo en cuenta que concurre una atenuante y ninguna agravante y prácticamente no hay extensión de mal causado precisada que permita entender por qué se baja solamente 3 años en relación al grado de subida.

Expresa que el Tribunal no solo contraviene la ley, **art. 68, inc. 2º y 3º, y el art. 69 CP, junto con el art. 36 CPP**, sino que hace errónea aplicación del derecho (en el sentido restringido y amplio del concepto jurídico), puesto que resulta irrisoria la rebaja con una atenuante y ninguna agravante, que incluso pudo llegar a los tres grados conforme lo permite el art. 68 CP. Tampoco logra explicar, lógica y normativamente, la extensión del mal causado, conforme lo exige el art. 69 del Código Penal, pues se trata de un delito simple, sin mayor complejidad y



acreditados gracias precisamente a la declaración de su representado, que le ha traído graves costos.

Concluye solicitando se haga lugar al recurso y se dicte **sentencia de reemplazo**, en virtud de la causal alegada del art. 373 letra B del Código Procesal Penal en relación con el art. 385 del mismo Código, pues se ha impuesto una pena superior a la que legalmente corresponde, determinando que, concurriendo una atenuante y ninguna agravante, se fije la pena en 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo por el delito de Robo con Violencia e Intimidación en grado de Consumado, o **en subsidio**, se fije una pena menor a la impuesta por el tribunal, atendidas las circunstancias modificatorias reconocidas y la baja extensión del mal causado, conforme al art. 68 y 69 del Código Penal.-

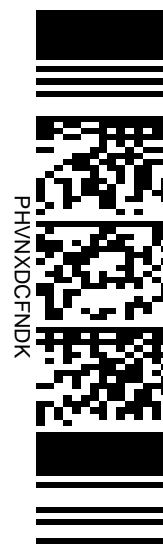
2.-º) A la audiencia del pasado 6 de enero de 2023 comparecieron a estrados el defensor y el abogado del Ministerio Público, oportunidad en que la defensa reiteró los argumentos planteados en el recurso y el Ministerio Público solicitó el rechazo del mismo, quedando la causa en acuerdo.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la única causal de nulidad hecha valer por el recurrente es aquella contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, que tiene lugar cuando en el pronunciamiento de la sentencia se ha hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, señalando que el fallo impugnado habría vulnerado los artículos 68 y 69 del Código Penal y artículo 36 del Código Procesal Penal resolviendo una irrisoria rebaja de pena pese a concurrir una atenuante y ninguna agravante, reducción que incluso pudo llegar a los tres grados conforme lo permite el artículo 68 Código Penal, sin precisar cuál fue la extensión del mal causado, conforme lo exige el art. 69 del Código Penal, concluyendo que con ello se vulnera el artículo 385 del Código Procesal Penal, pues se aplica una pena superior a la que legalmente corresponde, solicitando que se anule solamente la sentencia y se proceda a dictar una sentencia de reemplazo.

Cabe hacer presente que esta última disposición legal tiene aplicación solamente cuando la sentencia hubiere calificado de delito un hecho que la ley no considerare tal, aplicado una pena cuando no procediere alguna o impuesto una superior a la que legalmente correspondiere.

SEGUNDO: Que debe dejarse asentado que, en virtud del motivo de nulidad invocado, ello significa que el recurrente reconoce los hechos establecidos por el tribunal a quo en el considerando cuarto, sin hacer cuestión de los mismos, hechos que fueron calificados en el considerando séptimo como constitutivos del delito de robo con violencia e intimidación en las personas en grado de consumado, previsto y sancionado en los artículos 432, y 436, en relación al artículo 439, todos del Código Penal, toda vez que resultó acreditado, que el



acusado, actuando en conjunto con al menos otros cinco individuos, procedió a sustraer cosas muebles ajenas, con ánimo de lucro, sin la voluntad de su dueño valiéndose para tal propósito de intimidación y violencia, toda vez que las víctimas en el accionar delictivo resultaron lesionadas por los golpes que recibieron, conjuntamente con la intimidación aplicada mediante el uso de elementos que aparentaban ser armas de fuego, y que causó en ellos un justo temor de verse dañados en su integridad física, como pudieron, en el mismo contexto, confirmarlo, con los golpes que les fueron propinados.-

TERCERO: Que el artículo 449 del Código Penal prescribe que: *“Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 ter, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:*

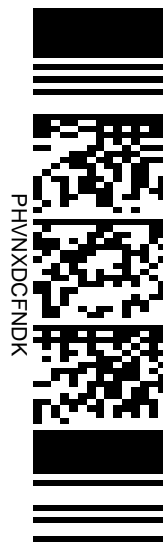
1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el minimum si consta de un solo grado.

CUARTO: Que, de la disposición precedentemente transcrita, se infiere en términos indubitados que, para determinar la pena, entre otros delitos, del delito de robo con violencia e intimidación en las personas en grado de consumado, como el que ha sido establecido por la sentencia impugnada, debe excluirse imperativamente a las normas sobre aplicación de las penas dispuestas por los artículos 65 a 69 del Código Penal, lo que resta toda fundamentación al recurso si se tiene presente que, precisamente, se invoca la infracción de los preceptos contenidos en los artículos 68 y 69 del citado cuerpo de leyes, sin perjuicio que, debe descartarse la vulneración del artículo 385 del Código Procesal Penal, pues el fallo en revisión no ha aplicado una pena superior a la que legalmente corresponde, toda vez que ha hecho una recta determinación de la pena, acorde lo sancionado por el artículo 449 del Código Penal y de lo cual da clara explicación y fundamento el motivo décimo cuarto de la sentencia impugnada.-

QUINTO: Que acorde lo razonado en los motivos que anteceden, debe descartarse el vicio de nulidad que se invoca como fundamento del presente recurso de nulidad, el que será rechazado, conforme se dirá en la parte dispositiva de este fallo.-

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 342 letra c), 352, 358, 372) y 373 letra b) del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad deducido por el abogado don



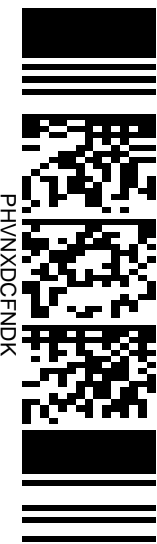
Eduardo Cornejo González, en representación de Benjamín Venegas Rodríguez, en contra de la sentencia definitiva de fecha 21 de noviembre del año 2022 dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó, que condenó a su representado, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de Robo con Violencia e Intimidación en grado de Consumado, ocurrido el día 11 de mayo de 2019, alrededor de las 22:00 horas en la empresa Coca Cola, ubicada en Longitudinal Sur KM 186, de Curicó, sentencia que en consecuencia no es nula.-

Regístrese y devuélvase.

Redacción del abogado integrante Guillermo Monsalve Mercadal.

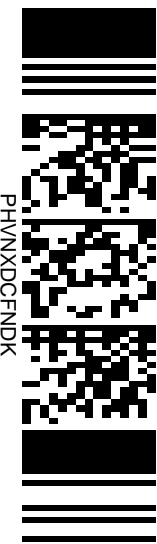
Rol 1499-2022 Penal.-

Se deja constancia que no firma el abogado integrante don Guillermo Monsalve Mercadal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por estar ausente.



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Talca integrada por Ministro Moises Olivero Muñoz C. y Ministra Suplente Marisol Macarena Ponce T. Talca, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.

En Talca, a veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.